**RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO CINCUENTA Y SIETE CIVIL MUNICIPAL**

Bogotá D.C., once (11) de septiembre de dos mil veinte (2020)

ACCIÓN DE TUTELA No. 11001 40 03 057 2020 00505 00

Cumplido el trámite de rigor procede el Despacho a proferir la sentencia que en derecho corresponda.

ANTECEDENTES

1. El señor Dairo Antonio Vanegas Martínez, a través de apoderado judicial, presentó acción de tutela contra la sociedad Apiros S.A.S representada legalmente por la señora Jimena Santamaría Gómez, manifestando vulneración de los derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, seguridad social, igualdad, mínimo vital y a la protección “...y asistencia a las personas en condición de debilidad manifiesta”.

2. Como elementos fácticos de su accionar, en esencia adujo, que el 23 de agosto de 2016 ingresó a laborar en la empresa Apiros S.A.S., en el cargo de Supervisor Motorizado, con un salario de \$1.247.800 mensuales más \$102.854 como auxilio de transporte para un total de \$1.350.654.

2.1. El 26 de junio de los cursantes, fue despedido de manera injusta.

2.2. Respecto al estado de debilidad manifiesta al momento del despido arguye que el 8 de diciembre de 2016 tuvo un accidente de trabajo el cual le generó trauma de hombro izquierdo, lesión de Hill Sachs con lesión de la glenoides con bankart óseo invertido, manguito rotador, desacondicionamiento de tobillo izquierdo, que le generó una incapacidad de 4 días, la cual tuvo conocimiento su empleadora.

2.3. En la Clínica del Occidente le ordenaron la realización de 10 sesiones de terapias de hombro izquierdo y 10 sesiones de terapias de tobillo izquierdo, las cuales culminó en el mes de abril de 2017. Seguidamente, el especialista le ordenó la resonancia magnética debido a que seguía con la misma sintomatología (programada para el 2 de junio de 2017).

2.4. Debido a las agendas de citas médicas, sus tratamientos han venidos siendo prestados en los años 2018, 2019 y 2020.

2.5. La entidad encartada siempre tuvo conocimiento de dicha situación, ya que “...había estado en algunas citas médicas, y le entregué copia de mis diagnósticos, además para los permisos les debía justificar las ausencias para las citas de las terapias”, aunado a que, en la liquidación final se certifica que ha tenido 144 días de incapacidad.

2.6. Al momento de la terminación del contrato de trabajo, estaba pendiente la realización de la resonancia magnética, una artroscopia y una junta médica, para determinar los demás padecimientos médicos a seguir. Además, presentaba limitaciones médicas para trabajar y con citas con especialistas para el proceso de

valoración por Ortopedia debido al diagnóstico de *“TRAUMA DE HOMBRO IZQUIERDO, LESION DE HILL Y SACHS CON LESION DE GLENOIDES, CON BANKART OSEO INVERTIDO, MAGUITO ROTADOR, DESACONDICIONAMIENTO DE TOBILLO IZQUIERDO”*.

2.7. Con ocasión a la resonancia, el médico determinó que debía ser intervenido quirúrgicamente (en el hombro izquierdo) debido a la fractura que presentaba.

2.8. No cuenta con ayuda económica de nadie, está desprotegido, y ha recibido un trato discriminatorio por parte de su empleadora, aunado a ello, no dispone de otro mecanismo idóneo, eficaz y efectivo para procurar el amparo de sus derechos a fin de conservar su ingreso vital para su subsistencia y la de sus 2 hijos menores de edad.

2.9. Al momento de la culminación de la relación laboral, estaban pendientes ordenes médicas, por lo que, conllevó a su desafiliación sin poder acceder a los tratamientos correspondientes.

3. Pretende a través de esta queja el amparo de las prerrogativas invocadas, y que se ordene a la sociedad encartada que: **i)** reintegre al señor Dairo Antonio Vanegas Martínez a un cargo de igual o mejores condiciones que desempeñaba al momento de la finalización del vínculo laboral, teniendo en cuenta las recomendaciones y restricciones, **ii)** cancele todos los salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir desde la fecha del despido hasta cuando se haga efectivo el reintegro, **iii)** cotice los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Riesgos Profesionales desde el momento en que surgió la desvinculación hasta cuando se haga efectivo el retiro, **iv)** cancele la sanción prevista en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997.

4. Por auto del 7 de septiembre de los cursantes se admitió la acción de tutela, se ordenó la notificación de la entidad accionada y la vinculación del Ministerio de Trabajo. De igual forma, se requirió al accionante para que aportara cada uno de los documentos (en archivo PDF) descritos en el acápite de pruebas, como quiera que el link dispuesto para su descarga, no permitía el acceso para la visualización dichas misivas, frente a lo cual, mediante correo electrónico (8 de setiembre) aportó: poder, contrato de trabajo a término indefinido, historias clínicas, liquidación, formato institucional para el uso y manejo de la historia clínica salud ocupacional, y recetario médico.

5. El **MINISTERIO DE TRABAJO**, en síntesis, alegó falta de legitimación por pasiva, debido a que no es ni fue empleadora del accionante, lo que implica que no existe ni existió un vínculo de carácter laboral, por lo mismo no existe obligaciones ni derechos recíprocos, lo que da lugar a que haya ausencia, bien sea por acción u omisión de vulneración o amenaza de derecho fundamental alguno.

Frente a la estabilidad laboral reforzada, señala que lo es a favor de los trabajadores con discapacidad o incapacitados al momento del despido.

6. La sociedad **APIROS S.A.S**, al contestar el libelo, a través de apoderado, señaló que el señor Vanegas inició su relación laboral desde el 23 de agosto de 2016 en virtud de un contrato a término indefinido, aunque el mismo culminó por acuerdo transaccional el 1 de junio de 2017, el petente instauró una acción de tutela ante el Juzgado 7 Penal Municipal con Función de Conocimiento quien negó el amparo que posteriormente fue concedido por el Juzgado 9 Penal del Circuito de Conocimiento, mediante fallo del 19 de septiembre de 2017.

6.1. La mencionada decisión fue cumplida, según consta en el documento denominado “CONSTANCIA RESTABLECIMIENTO DE FUNCIONES EN ATENCIÓN FALLO DE TUTELA JUZGADO 9 PENAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ”.

6.2. Las razones que dieron lugar a la reclamación del accionante, corresponden a hechos superados como quiera que los mismos se centraron en la existencia de un accidente de tránsito de origen común acontecido el 8 de diciembre de 2016, el cual, sólo causó una incapacidad inicial de 4 días. En ese momento, el actor manifestó tener pendientes 10 sesiones de terapias, haberse practicado una resonancia magnética, y que, además tenía pendiente una intervención quirúrgica. De igual manera anexo un examen médico ocupacional de egreso con observación “*no satisfactorio*”.

6.3. En el examen médico de retiro no se consigna ninguna anotación que sugiera secuela alguna del accidente de origen común que fue tratado por la EPS, y que finalmente no generó incapacidades superiores a 180 días.

6.4. En ese sentido, indica porque con extrañeza el extrabajador sigue refiriendo los mismos argumentos que aconteció en el año 2017, derivado de un accidente de tránsito no relacionado con su actividad laboral, a pesar de que a la fecha se han hecho efectivos todos los procedimientos pendientes por cuenta de la Entidad Promotora de Salud.

6.5. La actividad que dio origen a la contratación inicial ya desapareció, al petente le reasignó nuevas funciones en unas de las sedes de la compañía con el único propósito de dar cumplimiento a la sentencia primogénita, sin embargo, y por cuestión de la situación actual (COVID-19), la actividad de “Supervisor Administrativo de Seguridad” ya no se requiere, razón y no otra, por la cual dio por terminado el contrato de trabajo. Agrega, que el mismo no guarda nexo con la condición física del actor, ya que no estaba incapacitado, no tiene enfermedad catastrófica y no estaba en un estado de debilidad manifiesta.

6.6. El actor fue intervenido quirúrgicamente en el año 2017, entre los meses de julio y hasta el 22 de octubre de 2017, después atendió las recomendaciones médicas temporales de 6 meses, las cuales fenecieron el 22 de abril de 2018, por recuperación satisfactoria.

6.7. Para el 26 de junio de los cursantes, le entregó al accionante orden de práctica de examen médico de retiro, no posee “*...ningún tipo de restricción laboral*”, sin

hallazgo la única recomendación que se registra atendiendo las manifestaciones del petente es continuar con el control médico en su EPS.

6.8. La última incapacidad reportada data del 12 de septiembre de 2019.

CONSIDERACIONES

1. Como lo señala la Corte Constitucional “...Conforme al artículo 86 de la Carta, la acción de tutela ésta revestida de un carácter subsidiario (...) que puede ser utilizada ante la vulneración o amenaza de derechos fundamentales cuando: i) no exista otro medio judicial a través del cual se pueda reclamar la protección de los derechos, ii) cuando existiendo otras acciones, éstas no resultan idóneas para la protección de los derechos de que se trate, o iii) cuando existiendo acciones ordinarias, la tutela se use como mecanismo transitorio para evitar que ocurra un perjuicio irremediable de naturaleza iusfundamental.”. Es decir, siempre que exista otro medio judicial que garantice la eficacia de la protección de los derechos de la tutelante, deberá acudirse a estos y no a la acción de tutela (Sentencia SU- 772/14).

Si bien es cierto la acción de tutela busca la protección de los derechos fundamentales vulnerados o amenazados por la acción u omisión de la autoridad pública, esta también procede contra las acciones u omisiones de los particulares en tres situaciones específicas: i) preste un servicio público, ii) exista una relación que implique subordinación o indefensión, iii) la conducta del particular afecta grave y directamente el interés colectivo.¹

2. Relativo a la **estabilidad laboral reforzada** de quienes se encuentran en situación de debilidad manifiesta por limitaciones físicas, psíquicas o sensoriales, la citada Corporación en sentencia T-041 de 2019 señaló que “...El derecho a la estabilidad en el empleo consagrado en el artículo 53 de la Constitución, constituye un principio que rige todas las relaciones laborales; dicho mandato se manifiesta en “la conservación del cargo por parte del empleado, sin perjuicio de que el empleador pueda dar por terminada la relación laboral al verificar que se ha configurado alguna de las causales contempladas en la ley como justa”.

[...] Ahora bien, con fundamento en la interpretación armónica de al menos cuatro preceptos constitucionales, la protección general a la estabilidad en el empleo se refuerza cuando el trabajador “es un sujeto susceptible de discriminación”, o cuando por sus condiciones particulares “puede sufrir grave detrimento de una desvinculación abusiva”.

[...] Con todo, el trabajador en condición de discapacidad o que tiene limitaciones físicas, psíquicas o sensoriales que le impiden o dificultan sustancialmente el desarrollo de sus funciones puede ser despedido cuando incurre en una causal objetiva para la terminación del contrato; no obstante, en garantía de la especial protección que le asiste a estos sujetos, el empleador tiene el deber ineludible de contar con la autorización previa del Inspector del trabajo para dar por culminado el vínculo laboral.

¹ Así lo tiene más que decantado la Corte Constitucional en varios de sus pronunciamientos cómo son las sentencias T-421/2017, T- 4307/2017, T-117/2018, entre otras.

[...] Por el contrario, cuando el despido se hace sin previa autorización del inspector del trabajo, la jurisprudencia constitucional ha aplicado “la presunción de desvinculación laboral discriminatoria”, entendiéndose que la ruptura del vínculo laboral se fundó en el deterioro de salud del trabajador; evento en el cual le corresponde al empleador utilizar los medios probatorios a su alcance con el objetivo de desvirtuar dicha presunción.

[...] Resulta relevante destacar que la Corte ha establecido una línea jurisprudencial uniforme sobre la estabilidad laboral reforzada de los trabajadores en circunstancias de debilidad manifiesta por razones de salud

[...] Para resolverlo, se estableció que los trabajadores que: “a) tengan una afectación en su salud; (b) esa circunstancia les ‘impida o dificulte sustancialmente el desempeño de sus labores en las condiciones regulares’, y (c) se tema que, en esas condiciones particulares, pueden ser discriminados por ese solo hecho, están en circunstancias de debilidad manifiesta y, por tanto, tienen derecho a la ‘estabilidad laboral reforzada”.

En ese sentido, para que surja la estabilidad laboral reforzada debe presentarse una terminación de la relación laboral del trabajador que se encuentre en una situación de debilidad manifiesta por limitaciones físicas, psíquicas o sensoriales, y que haya sido despedido sin previa autorización del Inspector de Trabajo.

3. Relativo a la **seguridad social** el artículo 48 de la Constitución Política lo consagra bajo una doble connotación: i) como derecho fundamental; y ii) como un servicio público de carácter obligatorio que se presta bajo la dirección, coordinación y control del Estado.

“...Esta garantía fundamental “surge como un instrumento a través del cual se le garantiza a las personas el ejercicio de sus derechos fundamentales cuando se encuentran ante la materialización de algún evento o contingencia que mengüe su estado de salud, calidad de vida y capacidad económica, o que se constituya en un obstáculo para la normal consecución de sus medios mínimos de subsistencia a través del trabajo”. Su fundamentalidad se sustenta en el principio de dignidad humana en virtud del cual “resulta posible que las personas afronten con decoro las circunstancias difíciles que les obstaculizan o impiden el normal desarrollo de sus actividades laborales y la consecuente recepción de los recursos que les permitan ejercer sus derechos subjetivos”.²

4. En cuanto al **mínimo vital** ha dicho la Corte Constitucional que este “constituye la porción de los ingresos del trabajador o pensionado que están destinados a la financiación de sus necesidades básicas, como son la alimentación, la vivienda, el vestido, el acceso a los servicios públicos domiciliarios, la recreación, la atención en salud, prerrogativas cuya titularidad es indispensable para hacer efectivo el derecho a la dignidad humana, valor fundante del ordenamiento jurídico constitucional”. Remuneración generada del contrato de trabajo en razón de la contraprestación de un servicio (artículo 127 del CST).

EN EL CASO CONCRETO

² Sentencia T-281 de 2018.

El accionante invoca la protección de sus derechos fundamentales que considera están siendo vulnerados por la conducta de la sociedad Apiros S.A.S representada legalmente por la señora Jimena Santamaría Gómez, en su calidad de empleadora, por cuanto dio por terminada la relación laboral sin tener en cuenta el estado de debilidad manifiesta del señor Dairo Antonio Vanegas Martínez en razón de sus condiciones de salud.

Temeridad

El artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 considera contrario a la Constitución el uso abusivo e indebido de este amparo, que se concreta en la duplicidad del ejercicio entre las mismas partes, por los mismos hechos y con el mismo objeto, por lo cual la Corte Constitucional ha señalado las reglas para acreditar que el accionante se encuentra inmerso en temeridad, tal y como lo establece la Sentencia T-679 de 2009 cuando: “...*(i) La **identidad de partes**, es decir, que las acciones de tutela se dirijan contra el mismo demandado y, a su vez, sean propuestas por el mismo sujeto en su condición de persona natural, o de persona jurídica, directamente o a través de apoderado.**(ii) La **identidad de causa petendi**, o lo que es lo mismo, que el ejercicio de las acciones se fundamente en unos mismos hechos que le sirvan de causa.**(iii) La **identidad de objeto**, esto es, que las demandas busquen la satisfacción de una misma pretensión tutelar o sobre todo el amparo de un mismo derecho fundamental. (iv) Por último, a pesar de concurrir en un caso en concreto los tres (3) citados elementos que conducirían a rechazar la solicitud de tutela, el juez constitucional tiene la obligación dentro del mismo proceso tutelar, de excluir la existencia de un argumento válido que permita convalidar la duplicidad en el ejercicio del derecho de acción. Esta ha sido la posición reiterada y uniforme de esta Corporación, a partir de la interpretación de la parte inicial del artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, conforme al cual: “Cuando sin motivo expresamente justificado la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes...”.*

De las documentales obrantes al libelo, atinentes a la copia del fallo de tutela proferido por el Juzgado Noveno Penal Municipal del Circuito de Conocimiento quien revocó la decisión proveída por el Juzgado 7 Penal Municipal con Función de Conocimiento, de entrada, podría decirse que existe un actuar temerario por parte del tutelante, debido a que en una primera oportunidad se conoció una demanda constitucional instaurada por el petente en contra de la sociedad Apiros S.A.S. (en su calidad de empleadora) con el fin de obtener el amparo del derecho a la estabilidad laboral reforzada y en consecuencia el reintegro a su puesto de trabajo junto con el pago de los salarios dejados de percibir, debido a la terminación del contrato de trabajo ocurrido el día 1 de junio de 2017.

Sin embargo, y ante la uniprocedencia en cuanto a las partes: tutelante (Dairo Antonio Vanegas Martínez) y tutelada (Apiros S.A.S.), de la causa base de esta acción: reintegro a su puesto de trabajo, la cancelación de los salarios, prestaciones sociales dejados de percibir y la sanción por desvinculación, no la hay en cuanto los hechos que hoy respaldan dichas pretensiones los cuales ocurrieron el 26 de junio de 2020, data en la cual fue despedido, y que aquí, además de las estabilidad laboral

reforzada, se invoca reparo de las prerrogativas a la seguridad social, igualdad, y mínimo vital

Subsidiaridad

Este requisito no se cumple, por cuanto, a la interposición de este trámite preferente, el petente aún contaba con los mecanismos ordinarios para obtener el amparo deprecado, pues fíjese que aunque se arguya por parte del querellante que no dispone de ningún mecanismo igualmente idóneo, eficaz y efectivo como lo es la tutela, para procurar la defensa de sus derechos de manera oportuna y prioritaria a fin de conservar su ingreso vital para su subsistencia y la de sus dos (2) hijos menores de edad, no probó de qué manera no son idóneos para obtener la guarda de sus pedimentos a través de ellos, tampoco dijo nada en cuanto a la advertencia descrita por el Juez Noveno Penal Municipal del Circuito de Conocimiento en la sentencia calendada 19 de septiembre de 2017 al señalar *“...se advierte al accionante que cuenta con el término de cuatro meses para la interposición de la correspondiente acción, ante la jurisdicción competente, para que este asunto sea finiquitado por dicha autoridad quien además, decidirá sobre la pretensión del accionante respecto de la indemnización aquí pretendida y si acaso lo solicita el actor”*.

En este punto se debe aclarar, que pese a que no exista una temeridad frente a la interposición del libelo, en razón a que los hechos que se fundamentan esta acción de cara con la presentada en el año 2017, no significa que se puede hacer uso de este mecanismo las veces que considere el actor sean necesarias, por cuanto en una primera oportunidad, el Juez de Conocimiento (Tutela), zanjó el asunto de la terminación para la época del 2017 de manera transitoria, con el fin de que el petente incoara las acciones judiciales pertinentes en pos de su reclamo, lo que no quiere decir otra cosa, que quien debe finiquitar definitivamente los supuestos surgidos de la relación laboral, que después del primer reintegro, en cumplimiento de lo ordenado en dicha providencia, culminó el 26 de junio de 2020, es el Juez Ordinario Laboral, en razón de lo dispuesto por el Juez de Tutela que conoció la situación en la primera oportunidad.

Mecanismos, que al revisar el libelo no se advierten que se hayan incoado por parte del solicitante, es decir, que con posterioridad al cumplimiento de dicho fallo de tutela que lo fue el día 30 de octubre de 2017 según documento denominado “CONSTANCIA RESTABLECIMIENTO DE FUNCIONES EN ATENCIÓN FALLO DE TUTELA JUZGADO 9 PENAL DEL CIRUCITO DE BOGOTÁ”, teniendo cuatro meses (a febrero de 2018) para presentar la demanda ante el Juez Natural, la misma no se verificó haberse presentado, y determinar de esa manera que dicho mecanismo no fue idóneo, ineficaz o improcedente para obtener la guarda de sus pretensiones que a través de esta vía y en esta oportunidad se invocan.

Más aún, cuando se señaló por parte de la empleadora que la desvinculación se dio por supresión del cargo, tal y como se certifica en la misiva adiada 9 de septiembre de 2020, de la cual se lee *“... Que el cargo de Supervisor Administrativo de Seguridad a la fecha no existe y que no es requerido porque el servicio de vigilancia fue tercerizado y a la fecha está siendo prestado por la empresa Andiseg – Andina de Seguridad”*.

Es decir, que el único camino que tiene el actor para obtener respuesta a sus pedidos aquí planteados en el Juez Ordinario Laboral.

En cuanto a este tema, en sentencia T-177 de 2011 La Corte Constitucional señaló: *“Frente a la necesidad de preservar el principio de subsidiariedad de la acción de tutela, se ha sostenido que aquella es improcedente si quien ha tenido a su disposición las vías judiciales ordinarias de defensa, no las utiliza ni oportuna ni adecuadamente, acudiendo en su lugar a la acción constitucional. Ello por cuanto que, a la luz de la jurisprudencia pertinente, los recursos judiciales ordinarios son verdaderas herramientas de protección de los derechos fundamentales, por lo que deben usarse oportunamente para garantizar su vigencia, so pena de convertir en improcedente el mecanismo subsidiario que ofrece el artículo 86 superior.”*

Frente a los derechos a la estabilidad laboral reforzada, seguridad social, igualdad, y mínimo vital

Para ahondar en razones, tampoco podría decirse que existe el quebrantamiento deprecado, puesto que de los elementos materiales probatorios aportados con el libelo, y los adjuntos a la contestación proferida por la entidad accionada (Apiros S.A.S.), no se logró constatar que efectivamente la terminación del contrato de trabajo se dio con ocasión a la enfermedad que padece el accionante (hecho 14) o que lo fue en el lapso de alguna incapacidad generada por las dolencias que le aquejan, situación que en caso de existir advertiría un trato discriminatorio, y que además ameritaría la autorización del Ministerio de Trabajo para su despido.

Téngase en cuenta, que contrario a lo argüido por el actor, *“...Mi empleador no tuvo contemplación alguna, a sabiendas de que estaba en tratamiento de mis patologías, y sabiendo que tenía pendiente una artroresonancia, un TAC y una junta médica, dio por terminado mi contrato de trabajo”*, de la historia clínica adjunta por el accionante, el galeno tratante indicó que las actuales condiciones de salud corresponden a que *“...SE CONSIDERA PACIENTE CON EXCELENTE MOVILIDAD CON ELEVACIÓN COMPLETA 160 ROTACIÓN EXTERNA DE 30 INTERNA DE L1 ADEMÁS CON JOBE HAWKINGS – CON NEER- OBRIEN -SPEED – ADEMÁS CON CHASQUIDO CON LA MOVILIDAD”*, sin que en la misma, se haya advertido recomendación o restricción para ejercer su labor. Aunado a ello, que para la fecha de expedición de la historia clínica y de las ordenes médicas que se aduce están presuntamente pendientes, datan del 12 de agosto de 2020, posterior a la fecha de la culminación de la relación laboral (26 de junio de 2020). Luego en ese sentido, no puede afirmarse que la culminación del contrato de trabajo se dio por el desmejoramiento de la salud que expone el tutelante, el cual en todo caso no se evidencia, es más, en la descripción del informe del *“CERTIFICADO MÉDICO DE APTITUD LABORAL CON ÉNFASIS EN OSTEOMUSCULAR”* del 6 de julio de 2020 – examen de egreso- no se advierte alguna restricción o impedimento por parte del señor Dairo Antonio Vanegas Martínez para el desempeño de su labor en la empresa accionada, al momento de la terminación del contrato.

Situación que afirma el hecho de que este caso debe ser resuelto ante las instancias correspondientes, más aún, cuando el Consejo Superior de la Judicatura – Presidencia mediante Acuerdo PCSJA 20-11567 del 5 de junio de 2020 dispuso entre otros, el levantamiento de la suspensión de términos judiciales a partir del 1 de julio hogaño.

En razón de lo anterior, no se puede concluir que el señor Dairo Antonio Vanegas Martínez al momento de la culminación de su relación laboral, se encontraba cobijado por la estabilidad laboral reforzada que se advierte a través de esta tutela, por cuanto no se probó que dicha desvinculación lo fue por su disminuida condición de salud, que en todo caso, como se advirtió en líneas precedentes, para el momento del despido no acreditaron, al contrario, se señaló un avance en sus padecimientos.

Relativo al perjuicio irremediable,³ no se evidencia su configuración, pues si bien, en el escrito de tutela se señaló que no cuenta con la ayuda económica de nadie, lo cierto es que no es un argumento suficiente para despachar favorablemente esta acción de tutela, en cuanto a la estabilidad laboral reforzada, puesto que es un asunto que debe ser zanjado ante las instancias Ordinarias, además, este mecanismo se interpuso a través de apoderado judicial, luego ligeramente no podría decirse que su mínimo vital está siendo segregado, además, y pese a que del Volante de Pago de la Liquidación Final le fue otorgada la suma de \$4.369.020 por concepto de prestaciones sociales e indemnización por despido, con las deducciones le pagaron la suma de \$697.219.

Finalmente, el Despacho advierte que su seguridad social no está quebrantada, por cuanto de la consulta efectuada en la página web de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES, actualmente se encuentra vinculado a la Caja de Compensación Familiar Compensar en el régimen contributivo en calidad de cotizante, donde puede acudir con el fin de continuar su tratamiento médico.

En conclusión, se despachará adversamente el resguardo invocado.

DECISIÓN

³ Sentencia T-222 de 2014, “...De acuerdo con la Constitución, específicamente con el artículo 86, la acción de tutela solo procede cuando la persona carezca de otro recurso judicial para defender sus derechos. Así, la mencionada disposición, establece que toda persona podrá reclamar ante los jueces “la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión” de autoridades públicas o particulares, siempre que el peticionario “no disponga de otro medio de defensa judicial”. Lo anterior, **sin perjuicio de que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable**. Esta regla se conoce como el requisito de subsidiariedad de la acción de tutela”.

En mérito de lo expuesto, el **JUZGADO CINCUENTA Y SIETE CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley;

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR el amparo invocado por el señor **DAIRO ANTONIO VANEGAS MARTÍNEZ**, por las consideraciones anteriormente expuestas.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta determinación a las partes y la entidad vinculada por el medio más expedito.

REMITIR: REMITIR oportunamente las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si el fallo no fuere impugnado.

NOTIFÍQUESE,

**MARLENNE ARANDA CASTILLO
JUEZ**

Firmado Por:

MARLENE ARANDA CASTILLO

JUEZ MUNICIPAL

JUZGADO 057 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ D.C.

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

d4db9d7159482d45a1a76c8f23d55c247d60cbd7694671b55cc636d43b225a79

Documento generado en 11/09/2020 01:24:56 p.m.